

20.^a SESION ORDINARIA — JUNIO 23 DE 1883

Presidencia del señor MADERO

Ministro presente: de justicia, culto e instrucción pública.

Senadores presentes: Avellaneda, Baibiene, Baltoré, Cambaceres, Carrillo, Cortés, Dávila, del Valle, Gelabert, Gómez, Mendoza, Moyano, Nougues, Oliva, Ortiz, Rodríguez, Santillán y Zapata.

Senadores ausentes, con aviso: Alvear, Bárcena, Barros, Civit, Febre e Igarzábal.

Senador ausente, con licencia: Iriondo.

SUMARIO

- 1.—Asuntos entrados.
- 2.—El señor senador **Avellaneda** solicita varios informes sobre escuelas normales y colegios. Se resuelve pedirlos por escrito al Poder Ejecutivo.
- 3.—Se aprueba un despacho de la Comisión de Legislación disponiendo que los **Consejos Superiores** de las universidades de Córdoba y Buenos Aires dicten sus estatutos de acuerdo con las bases establecidas en el mismo.

—En Buenos Aires, a veintitrés de Junio de mil ochocientos ochenta y tres, reunidos en su sala de sesiones el señor presidente y los señores senadores arriba inscriptos, se abrió la sesión con inasistencia de los señores senadores Alvear, Bárcena, Barros, Civit, Febre e Igarzábal, con aviso; e Iriondo, con licencia.

Leída y aprobada el acta de la anterior de 21 del corriente (19.^a ordinaria), se dió cuenta de los asuntos entrados, a saber:

1

Del Poder Ejecutivo

Mensaje del Poder Ejecutivo, adjuntando un expediente en que las municipalidades de Tres Arroyos, Lobería y Necochea se interesan por

que el proyecto de don Santiago Gabam sobre canalización y puerto en el río Quequén Grande sea despachado favorablemente. A la Comisión del Interior.

Despachos de Comisión

Despacho de la Comisión de Peticiones en el proyecto de ley en revisión jubilando a doña Plácida Figueroa, partera principal del Hospital de Mujeres en la Capital. A la orden del día.

—De la de Legislación, en el proyecto de ley en revisión relativo al establecimiento de las clínicas en el Hospital Buenos Aires de esta Capital. A la orden del día.

2

Sr. Avellaneda. — Pido la palabra.

Puesto que tenemos, señor presidente, un proyecto de instrucción pública a la orden del día, me parece una ocasión adecuada para que formule algunas preguntas respecto de este mismo ramo, preguntas que quiero que se pasen por la Cámara al Poder Ejecutivo.

Pero antes, señor presidente, empezaré por una pequeña digresión.

Parece a veces notarse cierta esterilidad aparente en las sesiones de las Cámaras. Efectivamente, presentamos pocos proyectos de ley e inquirimos aún menos sobre los diversos ramos de la administración pública.

Este es el hecho y puede ser un efecto producido por muchas causas; y, entre otras, por

servicios en la educación primaria dirigiendo escuelas como preceptores?

3º — ¿Cuánto cuesta a la Nación la formación de cada uno de estos alumnos maestros, tomando en cuenta los gastos de enseñanza y las pensiones que han recibido.

Preguntas sobre los colegios

1º — ¿Es o no conveniente reprimir el uso establecido de los nombramientos anuales para los profesores de los colegios?

2º — ¿Cuáles son los impedimentos que hay para volver a la práctica anterior de nombrar los profesores con sueldos fijos, con asignación permanente de los ramos de enseñanza y sin otras variaciones que las que determina la ley de presupuesto, como sucede con los demás empleados?

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — Es que podían quedar eliminadas dos preguntas que no hay razón de hacer. El señor senador queda satisfecho respecto a una de ellas.

Sr. Presidente. — Estando resuelto por la Cámara que se solicite del Poder Ejecutivo los datos pedidos por el señor senador, y no habiendo nada en discusión, pasaremos a la orden del día.

3

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Legislación ha estudiado el proyecto de ley presentado por el señor senador Avellaneda; disponiendo que los consejos superiores de las universidades de Córdoba y Buenos Aires dicten sus estatutos de acuerdo con las bases establecidas en el mismo; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación con las modificaciones siguientes:

1ª — Agregar en el acápite 3º de la base 3ª: «correspondiendo al Poder Ejecutivo y a la facultad respectiva el nombramiento, por mitad, de todos los miembros titulares».

2ª — En el acápite 4º de la misma base, intercalar, después de «serán provistas en», «concurso de», y después de «oposición», el cual se repetirá de ocho en ocho años.

Sala de comisiones, Buenos Aires, Junio 20 de 1883.

J. R. Baltoré. — Miguel N. Nougués. — Rafael Cortés.

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — El Poder Ejecutivo ordenará que los consejos superiores de las universidades de Córdoba y Buenos Aires dicten sus estatutos en cada una de estas universidades, subordinándose a las reglas siguientes:

1ª La universidad se compondrá de un rector elegido por la asamblea universitaria, de un consejo superior y de las facultades que actualmente funcionan o que fueren creadas por leyes posteriores. La asamblea universitaria es formada por los miembros de todas las facultades;

2ª El rector es el representante de la universidad — preside las sesiones de la asamblea y del consejo, ejecuta sus resoluciones y ejerce la jurisdicción universitaria — en todos sus establecimientos, cuando se hallare presente;

3ª El consejo superior se compone del rector, de los decanos de las facultades y de dos o más delegados que éstas nombren. Resuelve en última instancia las cuestiones contenciosas que hayan fallado las facultades, fija los derechos universitarios con la aprobación del Ministerio de Instrucción Pública, formula el proyecto de presupuesto para la universidad y dicta los reglamentos que sean convenientes o necesarios para el régimen común de los estudios y disciplina general de los establecimientos universitarios.

Cada facultad ejercerá la jurisdicción policial y disciplinaria dentro de sus institutos respectivos, aprobará o reformará los programas de estudios presentados por los profesores, dispondrá de los fondos universitarios que le hayan sido designados para sus gastos, rindiendo una cuenta anual al consejo superior, y fijará las condiciones de admisibilidad para los estudiantes que ingresen en sus aulas.

En la composición de las facultades entrarán, cuando menos, una tercera parte de los profesores que dirigen sus aulas.

Las cátedras serán provistas en oposición y serán admitidos como profesores libres los que lo soliciten, debiendo rendir ante las facultades una información de *vita et moribus*.

Los derechos universitarios que se perciban constituirán el fondo universitario, con excepción de la parte que el consejo superior asigne con la aprobación del ministerio, para sus gastos y para los de las facultades.

Cada cuatro años se dará cuenta al Congreso de la existencia de estos fondos.

Art. 2º — Los estatutos dictados por los consejos superiores con arreglo a las bases anteriores, serán sometidos a la aprobación del Poder Ejecutivo.

Art. 3º — Comuníquese, etc.

Avellaneda.

Sr. Presidente. — Está en discusión en general.

Sr. Baltoré. — Pido la palabra.

La Constitución de Buenos Aires, de 1873, estableció las principales bases sobre las cuales debían calzarse los estudios de la universidad. Las leyes orgánicas que debieran hacer esto no se han dictado hasta la fecha, y en tales condiciones pasó la universidad al gobierno nacional en 1880.

El Poder Ejecutivo se apercibió desde luego de este vacío inexplicable, y para llenarlo debidamente nombró una comisión compuesta de los doctores Avellaneda, Wilde, Quesada y Porcel de Peralta, a fin de que proyectasen la redacción de los estatutos de la Universidad de Buenos Aires. La comisión presentó su trabajo y el gobierno lo pasó a la Cámara de Diputados, haciéndole algunas ligeras observaciones.

Desde entonces ese proyecto permanece en la Cámara de Diputados, es decir, desde 1881, y allí estará probablemente, y pasará tanto tiempo como el transcurrido entre 1873 y 1880, sin que la Universidad de Buenos Aires tenga la constitución que ha debido tener.

Estas consideraciones son las que tuvo presentes el señor senador por Tucumán doctor Avellaneda, para presentar el proyecto que se discute. El cree, y la Comisión también, que este es el medio más práctico de arribar al resultado tantas veces buscado, y que su adopción no ofrece ninguna dificultad, porque la competencia, el saber, la experiencia de las personas encargadas de la redacción ofrecen suficientes garantías de acierto, sin olvidar, además, que la redacción de estos estatutos será revisada por el Poder Ejecutivo.

El pensamiento dominante del proyecto es garantizar la autonomía y la independencia de la universidad dentro de las facultades que las leyes le acuerdan. A esto responde la creación del fondo de escuelas que según informes cuenta hoy con dieciséis mil patacones y que con el andar del tiempo puede ofrecer a la universidad los recursos necesarios para tener vida propia.

No obstante esto, se observará que el proyecto atribuye al Poder Ejecutivo una intervención tal vez extensa en los asuntos universitarios; pero la razón es obvia: la universidad está obligada a vivir a expensas del tesoro público.

La independencia que se busca por este proyecto, tiene sus antecedentes en la historia de los establecimientos de esta clase, desde los tiempos más remotos.

Las universidades siempre han sido libres, siempre han sido autónomas. En otras épocas eran verdaderos Estados dentro de otro Estado, y tal vez algo más puesto que contaban con la protección de la Iglesia, y el Vaticano siempre estaba pronto a fulminar sus rayos contra los que atentasen a sus fueros e inmunidades.

Hoy los tiempos han cambiado; las universidades han sido reformadas; no tienen la jurisdicción antigua ni la importancia política y religiosa que tuvieron en otras épocas y que les dieron tanto renombre; sin embargo, subsiste siempre el principio de independencia como necesario a su vida.

No hay dos opiniones respecto a la conveniencia de que sean los hombres de ciencia los que enseñen la ciencia, y respecto a la necesidad de dejarla libre y sin compresiones arbitrarias que dificulten sus movimientos.

No se han enumerado las facultades, puesto que autorizándose por el proyecto para dividir las o aumentarlas, así se hará por la iniciativa del Congreso, del gobierno o de la misma facultad universitaria.

El concurso de oposición que se admite por esta ley, tiene adversarios y defensores convencidos.

Algunos dicen que este medio de proveer las cátedras, abriría ancho campo para que entrasen en el personal docente de la universidad, profesores que no tuviesen la competencia suficiente, alejando al mismo tiempo a las eminencias científicas.

La observación es digna de tenerse en cuenta; pero no hay que olvidar también que si estos peligros existen, hay otro peligro mayor,

Junio 23 de 1883

cual es la provisión de cátedras arbitrariamente, lo cual da por resultado muchas veces que el profesor tal vez cuida más de lucrar en su empleo que de aprender y enseñar.

Estos peligros se evitan con el concurso. Sin embargo, la Comisión no ha dejado de preocuparse de esa observación, y ha tomado un término medio, limitando el término del concurso a 8 años.

Si el profesor tiene competencia, si es inteligente, después de 8 años de enseñanza continua, es difícil que encuentre competencia en los nuevos concursos; si el profesor no fuese competente, sería un medio entonces de eliminar de la enseñanza un profesor que no reuna las condiciones indispensables.

Estas son, señor presidente, las consideraciones que han servido de base a la Comisión para aconsejar la adopción del proyecto que se discute.

Sr. Avellaneda. — Pido la palabra.

Las explicaciones que acaba de dar el señor miembro informante de la Comisión, son completas por sí mismas, pero voy a agregar algunas otras observaciones, a riesgo de ser redundante, contando más que con la atención, con la benevolencia de la Cámara.

Hace muchos años, señor presidente, o más bien, casi desde la promulgación de la Constitución nacional, la Universidad de Córdoba se encuentra sometida al régimen nacional; lo fué el año 53 ó 54, o para no citar con fijeza una fecha que pudiera resultar equivocada, lo fué desde los primeros años del gobierno de la Confederación.

Desde entonces fué ya un intento buscado por muchos, y que ha sido un reclamo permanente por parte de aquella universidad, el que se la dote de una ley orgánica que le dé bases fijas de existencia en sus relaciones con los Poderes Públicos de la Nación.

Estas bases fijas de existencia, sólo podían provenir efectivamente de una ley, porque no habiéndola, sólo podían dictarse decretos o reglamentos confirmados o aprobados por el Poder Ejecutivo, y quien dice un decreto, dice naturalmente la voluntad, el pensamiento de un ministro que pasa, y que tantas veces pasa rápidamente; que hoy puede ser un hombre ampliamente propicio para la enseñanza universitaria, y ser mañana otro cualquiera, con ideas si no hostiles, abiertamente contrarias, lo menos a ciertos modos de desarrollo en estas instituciones.

En una palabra, un decreto o un reglamento con la autorización ejecutiva o ministerial, es

y será siempre la inestabilidad, y por eso vino siempre requiriéndose por la Corporación Universitaria una ley.

En el gobierno de la Confederación, el señor ministro Campilla pidió a la Universidad de Córdoba que formulara sus estatutos, para someterlos a la aprobación del Congreso. Los estatutos fueron formulados, pero no se presentaron al Congreso, por no sé qué circunstancia de las muchas, que pudieron ocurrir en medio de las agitaciones y de las vicisitudes de aquella época.

Posteriormente la Universidad de Córdoba volvió a hacer una gran tentativa en ese sentido. Reunió su claustro, como así se llama la asamblea universitaria, nombró una comisión para la redacción de sus estatutos y los adoptó después de largas discusiones.

Los estatutos vinieron al Ministerio de Instrucción Pública, era yo presidente, y los envió inmediatamente al Congreso, llamándole la atención sobre este asunto, demostrándole la necesidad que tenía aquella vieja universidad de salir de lo precario y de lo arbitrario, y de sentar, en sus relaciones con los poderes públicos, su existencia sobre una base permanente, en fin, haciendo cuanta demostración empeñosa fué posible.

El Congreso o más bien la Cámara de Diputados, que fué por donde se introdujo, recibió este proyecto, lo destinó a una de sus comisiones, la Comisión lo introdujo en su carpeta y no volvió a salir a la luz.

Debo advertir que se encontraron precisamente sentados en aquella Cámara uno o dos Diputados por Córdoba, que eran los autores del proyecto, y que pusieron el mayor empeño en hacerlo despachar, sin conseguirlo.

Con la designación de la Capital en Buenos Aires, se nacionalizó su universidad.

El primer cuidado del ministerio, apenas tomó posesión de la universidad, fué nombrar una Comisión, a la que tuve el honor de pertenecer, para que redactara otros estatutos análogos.

Se redactaron inmediatamente; el ministerio los recibió, los pasó a la Cámara de Diputados con igual empeño que los anteriores, y están allí todavía en la carpeta de alguna Comisión, sin que después de tres sesiones, haya habido hasta ahora signo de que puedan ser traídos a la orden del día y considerados por aquella Cámara.

¿De dónde proviene esto, señor presidente? Lo dije en la primera ocasión, cuando presenté el proyecto que se halla en discusión.

Aquellos estatutos comprenden toda la vida

universitaria, son verdaderos reglamentos internos, abarcan desde lo principal hasta el último pormenor, y, por lo tanto, forman un folleto de 120 ó 130 artículos, y será siempre muy difícil que una Cámara esté tan sobrada de tiempo y de buena voluntad como para entrar a discutir artículo por artículo, un reglamento que no sea el de sus propias sesiones.

Por este motivo, pues, decía: ¿qué arbitrio, qué expediente podríamos tocar para que las universidades tuvieran reglas fijas de existencia, para que no dependieran de la voluntad, del pensamiento, de las ideas más o menos transitorias de los diversos ministerios, por los que en cada administración van pasando y quedando sometidas? ¿Cómo, en una palabra, tendríamos la ley que buscamos?

La experiencia dictaba ya la respuesta.

Dejemos los reglamentos con sus pormenores minuciosos, extraigamos de esos reglamentos o estatutos proyectados sus principios fundamentales, lo que podrían llamarse bases legislativas, reduzcámo las a lo esencial, a 6 ó 7 artículos, hagamos de ese modo una ley con pequeñas proporciones. De ese modo el Congreso podrá fácilmente tomarla en consideración y sancionarla, dar vida permanente y legal a las universidades en sus relaciones con los poderes públicos, y nuestros dos grandes establecimientos universitarios tendrán al fin lo que vienen buscando por caminos tan diversos y desde tantos años.

Después, a medida que avanzaba en la consideración de esta materia, me parecía que en cierto modo lo ocurrido había sido afortunado; que habría sido inconveniente, claramente inconveniente, convertir en ley todo un reglamento con sus prescripciones más minuciosas, con sus pormenores los más ínfimos, ¿por qué, señor presidente? Porque esto hubiera sido envolver la vida universitaria en una red de reglas inviolables, que cada una tendría la autoridad de ley, de tal manera que las universidades habrían venido a quedar de todo punto embarazadas en sus movimientos, no pudiendo aprovechar de la mayor experiencia para hacer correcciones, ni pudiendo entrar a modificar ningún artículo de sus extensos reglamentos, aunque fuera para cambiar o modificar las atribuciones de un bibliotecario, de un bedel u otro empleado subalterno, porque se habrían encontrado contenidas por el respeto debido a la ley.

Es verdad que esta ley podría ser cambiada, pero nos habríamos encontrado con la misma dificultad. Si se han necesitado 10 años para dar el reglamento, ¿cuántos otros se necesita-

rían para que el Congreso volviera a someterlo a una revisión e introdujera las modificaciones o enmiendas que la práctica hubiera aconsejado y que los consejos universitarios pidieran?

Además es necesario dar a las universidades cierta amplitud en sus medios de vida.

Los reglamentos no deben contener compresiones arbitrarias — contrayéndose únicamente a dotar a cada cuerpo universitario de los medios que necesita para prosperar, para desenvolverse y vivir. — Deberá crear el organismo universitario, si así puede hablarse, dejando lo demás a la acción de su propio desarrollo.

De suerte que todo lo que sea excesivamente reglamentario, y mucho más si es al mismo tiempo excesivamente autoritario, porque se deriva de la ley misma, no puede ser sino altamente pernicioso para el progreso universitario.

Las grandes universidades, aquellas en las que la enseñanza es tradicional, se hallan acreditadas desde siglos enteros, casi no tienen reglamentos especiales. El reglamento escrito se encuentra suplido por el funcionamiento real de sus instituciones docentes.

Por lo demás, señor presidente, el señor miembro informante de la Comisión ha explicado con claro discernimiento lo que este proyecto se propone. Sería inútil negarlo y debo confesarlo desde el primer momento. Este proyecto tiende a constituir bajo cierta autonomía el régimen de nuestras universidades.

El señor miembro informante ha observado perfectamente que, desde que nosotros tenemos cuerpos universitarios, por lejos que nos remontemos, y aun hasta la época de su fundación, bajo el imperio de los reyes y virreyes, nuestras universidades siempre fueron autónomas. Esta es nuestra tradición mantenida aun en las épocas más aciagas.

Puedo decirlo. Yo me he educado en la triste y tan combatida Universidad de Córdoba. He alcanzado a penetrar en sus claustros en días, por cierto, muy oscuros. Rosas acababa de caer; pero aún continuaba su gobierno, con el último de sus tenientes en Córdoba.

Bien, pues, señor presidente; yo puedo dar testimonio de esta verdad: aquel gobierno que todo lo conculcó, que hizo desaparecer todas las formas de una civilización, que era juez, porque juzgaba en apelación todas las causas, que había resumido en sí todos los poderes, ese gobierno absolutamente personal, ese gobierno de tribu, sin embargo, se encontraba detenido delante de una universidad. No había invadido su recinto, y yo mismo y muchos otros, hemos visto que durante el gobierno de López

Quebracho, se reunían los doctores tranquilamente, prestaban su voto, y nombraban rector con entera libertad. Este era, tal vez, el único resto de autonomía y de libertad que había quedado subsistente en la triste República Argentina.

Por lo demás, señor presidente, este es el carácter de todas las universidades, y el verdadero y esencial carácter.

Los gobiernos pueden costear sus gastos hasta que las universidades se encuentren dotadas de recursos propios; pero aunque las costee, en todas partes se ha consagrado a los establecimientos universitarios su autonomía propia, respetando al desarrollo de las ciencias, que necesitan ser cultivadas fuera de las agitaciones políticas y de las combinaciones administrativas que suelen obedecer a móviles tan diversos.

Hay un libro que anda en las manos de todos. Abrase el diccionario de Larousse, y lo cito por la fácil verificación de la cita. Tiene un interesante capítulo destinado a las universidades rusas.

Menciono precisamente las universidades rusas, porque quiero salir de los países donde las instituciones liberales rigen, para servirme aun del ejemplo que ofrecen aquellos donde impera el despotismo en sus formas más absolutas.

Larousse abre su artículo sobre las universidades rusas con estas palabras:

«La primera universidad fué la de Moscú. Desde su fundación se encuentra costeadada por el gobierno, y figura en su presupuesto» por tales cantidades, y las detalla.

Ahora en cuanto a su régimen y al reglamento de estas universidades, debe decirse que se encuentran dirigidas por un consejo, y que su constitución es autónoma.

Estas, pues, son las bases del proyecto. Existe hoy en el mundo un padrón que puede llamarse universitario.

Sr. Presidente. — Se va a votar en general el dictamen de la Comisión.

—Se vota y es aprobado.

—En seguida se pasa a cuarto intermedio.

—Vueltos a sus asientos los señores senadores, dice el:

Sr. Presidente. — Continúa la sesión.

—En discusión en particular el artículo 1º

Sr. Ortiz. — Me parece que hay deficiencia en esta primera base, porque no determina la

duración del rectorado, ni el día de la elección.

El reglamento provisional dado por el Poder Ejecutivo, que establece la elección del rector de la universidad en la misma forma que este proyecto, dice que será elegido el 1º de Enero de cada año, lo cual da a entender que el rectorado durará un año.

No sé cuál sea el pensamiento de la Comisión a este respecto, pero creo que sería conveniente completar esta base, fijando el tiempo que dure el rector en sus funciones y la época de la elección.

Sr. Baltoré. — El rector dura cuatro años según el decreto provisional.

La Comisión ha creído que estas bases principales, sobre las cuales deben calzarse los estatutos, no deben contener esa designación, y que la época en que debe ser nombrado el rector y el tiempo que dure en el ejercicio de sus funciones, debe establecerse en los estatutos. Por esa razón la Comisión no se ha preocupado de ese punto, creyendo que en los estatutos es donde corresponde hacerse esas designaciones.

El reglamento provisorio dice: «El rector es elegido por el término de cuatro años y puede ser reelegido indefinidamente.»

Sr. Ortiz. — No me parece mal el término de cuatro años; pero creo, en contra de lo que cree el señor miembro informante, que es aquí donde debe fijarse, la duración y la época de la elección del rector, porque esto es materia de organización.

No se puede dejar a las facultades que establezcan que el rectorado ha de durar diez años, veinte años o ha de ser vitalicio, es necesario que esta ley lo determine.

Sr. Baltoré. — La Comisión cree que esta cuestión no es fundamental y que puede, sin peligro, dejarse para los estatutos. Sin embargo no ha de hacer hincapié si se quiere establecer el término desde ya, aun cuando en los estatutos se fijaría quizá un término más conveniente, de acuerdo con los antecedentes del caso.

Sr. Ortiz. — Hago moción para que se agregue a la base 1ª, lo siguiente: «que durará 4 años en sus funciones pudiendo ser reelegido».

Sr. Avellaneda. — Molesto a la Cámara, porque, por la naturaleza de las funciones que desempeño como rector de la Universidad de la Capital, estoy en aptitud de dar antecedentes precisos sobre cada cuestión que se promueve en esta discusión.

El reglamento vigente señala la duración de 4 años para el rectorado y esta duración es tradicional en la Universidad de Buenos Aires y

es el término que rige. Más aun, en el proyecto que por comisión del Poder Ejecutivo formulamos ahora dos años, para regir a la universidad, y que se encuentra pendiente de la sanción de la Cámara de Diputados, nos subordinamos a esa costumbre tradicional, por que no hay necesidad de alterarla y fijamos igualmente 4 años. No hay por mi parte, ni creo que pueda haber inconveniente en señalar ese término de duración, por que no innovamos, no trastornamos lo establecido.

En cuanto a la fecha de la elección, es mejor dejarlo a los estatutos, porque en Enero, por ejemplo, es muy difícil hacer la elección de rector, a lo menos con el concurso del mayor número de personas que componen las facultades, pues en Europa, tenemos una doble feria: la de los tribunales y la de la universidad.

La fijación, pues, de la época de la elección, tendría inconvenientes inesperados y es mejor dejarla a los estatutos.

Sr. Batoré. — La Comisión acepta la modificación propuesta por el señor senador por Salta.

Sr. Presidente. — Se votarán una por una las bases del artículo 1º.

—Se vota la base 1ª con el agregado propuesto y se aprueba.

—Se lee la base 2ª y no siendo observada se vota si se aprueba y resulta afirmativa.

—Se lee y pone en discusión la base 3ª.

Sr. Avellaneda. — Pido la palabra para hacer una breve indicación a la Cámara.

Esta base 3ª comprende el conjunto de la vida universitaria.

Desde luego, debo decir que el proyecto que la Cámara discute, no contiene nada nuevo, que no reglamenta sino lo que existe tanto en la Universidad de Buenos Aires como en la de Córdoba, con diferencia de algunas ligeras modificaciones en atribuciones que pasan ahora ya de las facultades a los consejos o que bajan del consejo a las facultades, pormenores todos de pequeña importancia.

Las universidades tienen hoy calificaciones y divisiones perfectamente conocidas. Hay un tipo o un padrón universitario, como antes lo he dicho, y nosotros lo seguimos, aunque de lejos, con la insuficiencia de nuestros recursos.

Cada universidad se encuentra distribuida en diversos departamentos de estudios y su reunión bajo un régimen común y una disciplina general, es lo que constituye «la universidad».

Cada departamento es una acumulación de estudios, y se agrupan éstos entre sí ya por su conexión o naturaleza, o en países como el nuestro, en que sólo se da una tendencia especial y práctica a la educación, para formar las «profesiones» que son más requeridas por las necesidades sociales.

Así, tenemos dividida nuestra universidad en tres facultades o departamentos: uno de ciencias sociales o de derecho, de la cual salen los jurisconsultos o abogados; otra de ciencias matemáticas y físicas, de la cual salen los químicos, los ingenieros, los agrimensores y los físicos; otra de ciencias médicas y biológicas, de donde salen los médicos, farmacéuticos, dentistas, y otros portadores de diplomas en algún otro ramo del arte de curar.

Ahora bien; cada uno de estos tres departamentos de estudios es dirigido a su vez autónomamente también, por lo que se llama «La Facultad», que es el cuerpo directivo que tiene a su cargo la disciplina de los establecimientos respectivos y la dirección de los estudios.

Cada facultad se halla presidida por su deán o su decano.

De los delegados de las facultades y de los decanos se forma «el consejo universitario», que da unidad a la vida universitaria, por medio de la reunión de las diversas facultades representadas en su seno.

El consejo universitario estatuye en todo aquello que es común a las tres facultades; fija ciertas reglas superiores para la disciplina interna, y en los casos controvertidos que pueden afectar derechos particulares, cuando lo han resuelto las facultades, se ocurre a la apelación del consejo. En una palabra, el consejo, por medio del rector que lo preside, es también el representante de la universidad para toda su acción exterior.

Lo único que podría cuestionarse en este punto, versaría sobre el número de facultades. El nuestro es deficiente y nos faltan, a la verdad, facultades que están hoy establecidas en todo el mundo. No tenemos, por ejemplo, la Facultad de Filosofía y de Humanidades.

Pero hemos suprimido esta cuestión por medio del artículo anterior, diciendo que no se innova nada, que quedan existentes las facultades como se hallan establecidas actualmente, y que las que se agregaren en lo sucesivo, lo serán por la acción de una ley especial.

Sr. Ministro de Culto, Justicia e Instrucción Pública. — Pido la palabra.

Yo encuentro las bases que se discuten en este momento en la Cámara, aceptables en general.

Ellas son el extracto de los trabajos que ha tenido a la vista la Comisión.

Estos trabajos están representados por el decreto del Poder Ejecutivo de la provincia, debidos al distinguido y laborioso doctor Alcorita, decreto puesto en vigencia y practicado durante muchos años con ventaja en la Universidad de Buenos Aires.

Figuran también entre esos documentos los trabajos de la Comisión, a la que tuve el honor de pertenecer en unión con el señor senador por Tucumán doctor Avellaneda; también figura el decreto del gobierno fijando los estudios a las universidades de Córdoba y a la de Buenos Aires, haciendo común el estudio para las dos universidades, decreto que ha sido reformado en algunos puntos a indicación, benévolamente acogida, como debía ser, por la justicia de la observación, tanto del señor rector de la universidad, como de algunos miembros de las universidades de Buenos Aires y de Córdoba.

Las universidades de Córdoba y de Buenos Aires, pues, tienen una norma para dirigirse; esa norma es el decreto que, como digo, ha figurado entre los papeles que ha consultado la Comisión para hacer el despacho de las bases.

Ese decreto está sometido, lo mismo que el proyecto de estatutos, a la consideración del Congreso, y figuran entre los papeles que tiene la Comisión correspondiente, en la Cámara de Diputados; y si no se ha hecho oposición, a que se discutan en esta Cámara estas bases, ha sido porque ellas son una concentración de todo lo que se dice en esos documentos, y por las razones tan claramente establecidas por el señor senador por Tucumán, cuando ha dicho que era más fácil hacer salir de la Cámara un proyecto de ley corto, que tuviera las ventajas de la concisión de un proyecto largo, lleno de artículos y de detalles; de modo que, no teniendo tantas pequeñeces fijadas por la ley, las universidades tendrán más facultad para desenvolver sus resortes en bien de la enseñanza.

Queda, pues, establecido que estas bases, en lo principal, son el resumen, no sólo de lo que contienen esos documentos, sino de lo que ha formado, diré, jurisprudencia y doctrina en todo el mundo, respecto a universidades.

Pero, si bien hay ciertos puntos en los cuales están conformes todos los hombres eminentes que se ocupan de la instrucción pública, hay otros que son vivamente combatidos, y en los cuales el triunfo es enteramente tran-

sitorio, unas veces en pro, otras en contra de lo que estas bases establecen en el punto a que me voy a referir.

El modo de proveer las cátedras, por ejemplo, ha sido punto muy debatido; no sólo entre nosotros sino también en otras partes, con más asiduidad y más acopio de datos que entre nosotros.

Nosotros encontramos, puede decirse, la doctrina ya enteramente debatida, preparados todos los elementos, y cada uno de los elementos con su autoridad al lado.

Nuestra tarea es entonces sencillísima.

El decreto del Poder Ejecutivo establece el nombramiento de los profesores por el Poder Ejecutivo, pero en las provisiones que ha hecho el Poder Ejecutivo hasta ahora, ha consultado siempre a las facultades y ha oído con atención sus indicaciones, y es en virtud de esas indicaciones que se han hecho los nombramientos.

De manera que, si en derecho corresponde el nombramiento al Poder Ejecutivo, en el hecho son las facultades o el consejo superior los que en realidad han hecho el nombramiento de los profesores.

Tres medios aceptables hay para la provisión de las cátedras. Estos tres medios son, en los países que tienen una organización análoga a la nuestra, la presentación de candidatos por medio del Ministerio de Instrucción Pública a las facultades o los consejos superiores de la universidad, la presentación de las facultades al ministerio, de los candidatos con quienes se han de proveer las cátedras, y el concurso.

Ninguno de los tres medios es nuevo, ninguno de los tres medios es bueno tampoco en absoluto, ni podría decirse cuál de los tres medios es el más viejo, pero puedo decir que el sistema de la provisión de las cátedras por medio del concurso, es muy viejo.

Recuerdo, a propósito de esto, una discusión que el distinguido literato señor Toro presentó en uno de sus trabajos más notables hecho en Chile. Es todo un libro ameno, lleno de citas encantadoras, de las cuales se desprende una enseñanza grandísima respecto a este punto. El señor Toro cuenta, con la gracia y habilidad especial que tiene por su talento, una discusión que duró veinte años, en tiempos remotos, creo que en 1700, o a principios de 1700, entre dos catedráticos que optaron a una cátedra por concurso.

No había en aquel tiempo ni medios de viaje ni las comodidades que hay ahora: un viaje a Europa era como una despedida de este conti-

nente; no se sabía si los buques llegaban, la mayor parte se perdían: emprender un viaje, pues, en esas circunstancias, era como despedirse de este mundo.

¿Cuál no sería el interés que tendrían los candidatos cuando emprendían viajes a Europa a ver el rey, a presentarse ante los tribunales, a reclamar una cátedra dada en concurso?

La discusión duró veinte años, y concluyó por resolverse, creo que por la muerte de uno de los catedráticos.

Con motivo de aquella discusión, la opinión del pueblo se dividió, y no se puede uno imaginar toda la secuela de circunstancias a que dió lugar aquel malhadado concurso.

Digo esto para dejar establecido lo viejo que es y los inconvenientes a que se presta el concurso.

Pero nosotros podemos mirar de más cerca las cosas y presentar las dificultades con mayor claridad.

¿Qué se dice en favor del concurso para la provisión de cátedras?

Se dice que es un medio independiente en que están consultadas todas las garantías de los candidatos y también las garantías para la enseñanza.

Yo, señor presidente, acepto que, teóricamente, los sostenedores del concurso para la provisión de las cátedras tienen mucha razón.

Efectivamente, parece que, cuando el nombramiento se hace por una corporación, el nombrado debe ser elegido por sus calidades; parece que cuando el nombramiento se hace por una corporación, esa corporación debe ser imparcial, pues cuando el nombramiento se hace en esas condiciones, parece que no ha de irse a elegir a un incompetente, ni que ha de ir una mayoría a ponerse en complot para proceder en nombre de pasiones e intereses mezquinos.

Cuando se hace un concurso, parece que los individuos que se presentan: él, han de ser los más competentes, y que han de estar muy bien preparados; y parece también que, si son nombrados por esta corporación, los candidatos, una vez convertidos en profesores, han de desempeñar su cometido a entera satisfacción y que han de consagrar todo su tiempo a la cátedra, a la cual se creen con derechos adquiridos por una victoria.

Pero, en la práctica, señor presidente, nada de esto es cierto.

El nombramiento hecho por el Poder Ejecutivo, o por persona, comparado con el nombramiento hecho por una corporación, tiene más

ventajas, y responde, en la práctica, con mayor seguridad todavía, a las garantías que se exigen.

¿Por qué? Por una razón sencilla. Las corporaciones son muy irresponsables; no hay una entidad cívica que responda del hecho.

El individuo cuando hace un nombramiento, sabe que él va a ser criticado o aplaudido; mientras que cuando una asamblea hace un nombramiento, la personalidad responsable se escapa, diré así, se substrahe a la responsabilidad: es la mayoría; nadie tiene especialmente la culpa; cada uno tiene una parte en ella, si la hay, y por lo tanto no es responsable sino de la parte que le toca; pero jamás puede ser esa una responsabilidad efectiva.

La crítica no puede pesar lo mismo sobre una asamblea que sobre un individuo. Entonces resulta esto: que el individuo tiene siempre más cuidado en la elección del candidato que la corporación.

Se puede decir que las influencias se pueden ejercitar mejor sobre el individuo que sobre la corporación.

Esto que parece una verdad, no es más que una verdad teórica.

Las influencias se ejercitan con mucha mayor ventaja sobre las corporaciones que sobre los individuos, precisamente porque la responsabilidad de cada uno de los que forman parte de esa corporación es menor, y de esto nos dan un ejemplo vivo todos los concursos.

La mayoría que ha discernido el triunfo a un candidato, no lo ha discernido porque cree que es más competente; lo ha discernido por los mismos motivos por que los discerniría un individuo, cuando más; porque un individuo miembro de una corporación, no rechaza todos estos alicientes y estas tentaciones humanas que obran sobre los demás hombres, y pierde en realidad una parte de la responsabilidad, lo que le da más libertad para hacer lo que quiere.

Así, pues, la garantía que se busca en el concurso es una garantía falaz.

Otra fase de la cuestión: ¿quiénes son los que se presentan a los concursos? No son nunca los más competentes; puede decirse nunca — no diré que no hay alguna excepción; tomo esa palabra en su sentido general —; no son nunca los más competentes, repito; son siempre los más audaces; son los que tienen una ventaja aparente sobre las ventajas reales que tienen los otros; son los que hablan mejor, los que tienen mayor audacia, los que tienen más amigos quizás, los que tienen hasta cierta práctica en el uso de la palabra, los que saben dar «bue-

nos» exámenes — y esto lo entenderán todos los que han concurrido a las aulas de la universidad o a los colegios —; son los que llamados a dar pruebas de competencia en una materia no responden de una manera proporcional a los conocimientos que tiene cada alumno, sino a cierto arte para dar examen, al cual ha podido referirse el señor senador cuando habla de las cualidades de los profesores.

Hay un arte para dar examen. Yo he visto, y muchos de mis condiscípulos han visto también, individuos completamente ignorantes e incompetentes en una materia, pasar sus exámenes brillantemente; y a eso están expuestos los que asisten en los concursos a esa clase de pruebas, y esos son a los que generalmente se discierne el triunfo.

Los concursos apartan también a muchos individuos que se encuentran, por el crédito de que gozan, por su posición y por otras causas, en condiciones de transmitir mejor sus conocimientos a los alumnos; no se presentan a los concursos las personas que tienen su reputación hecha.

Yo preguntaría, y desearía que se me contestase con ingenuidad, ¿si se cree que los primeros abogados, ingenieros o médicos, se presentarían en concurso a obtener una cátedra?

Preguntaría también, para que se contestara con toda ingenuidad, ¿si no es cierto que si el individuo o el Poder Ejecutivo no hubiera nombrado algunos de los profesores que existen ahora en las facultades, esos profesores no existirían allí y se verían llenas las facultades de otros individuos que hubieran obtenido su cátedra por concurso, teniendo o no competencia, porque ya he dicho cuál es la suerte de los candidatos, según las aptitudes especiales?

Hay varias circunstancias que apartan a los candidatos de los concursos, y una de ella es la siguiente: el amor propio.

Es desagradable citar nombres propios, y yo pierdo en eso una ventaja que tendría, si acaso me fuera permitido; pero yo creo seguramente que no se presentaría a concurso una de nuestras eminencias médicolegista o de ingenieros, si acaso supiera que va a tener como antagonista individuos audaces, recién salidos de las aulas, que tuvieran más o menos brillo en su palabra, esa competencia especial que suelen tener algunos para dar pruebas en público.

Los verdaderos maestros, pues, serán apartados de los concursos.

Entonces, ¿en qué condiciones se quedaría el juez, aquel que debe decir cuál ha de ser el que entre a llenar un puesto en una facultad? Se encontraría precisamente en la misma situa-

ción de un tribunal que tiene que elegir entre los que se le presentan. Se me contestará: «no, porque puede rechazarlos a todos.»

Sí, yo contestaré: en teoría, puede rechazarlos a todos; pero en la práctica, no los rechaza.

¿Por qué? Porque obran consideraciones de alta magnitud ante estas corporaciones.

Cuando la corporación que ha de hacer de juez en el concurso, sabe que uno o varios individuos se han preparado durante mucho tiempo y han consagrado largas horas al estudio, que han trabajado durante muchos días o muchos meses y años quizás para obtener una cátedra, es doloroso a cada uno de los miembros de ese jurado rechazarlos a todos, simplemente por la suposición de que no son competentes, porque no hay, hasta después de la prueba, nada absolutamente que les diga eso; y, después de la prueba, la razón pesa más fuertemente todavía sobre el jurado. No sólo ha estudiado, dice, ha trabajado, se ha desvelado, sino que se ha presentado a arrostrar todos los sinsabores que trae un acto de esta especie. Pesa esta consideración en el jurado, y una vez que se han presentado varios individuos poco competentes, no resuelve rechazarlos a todos, sino que elige entre los que se han presentado, es decir, elige entre los malos.

Mientras tanto, fuera del concurso, hay una porción de personas a quienes les gustaría haber recibido un nombramiento, y que consagrarían todo su trabajo a la enseñanza con ventajas para ella.

No necesitaría, señor presidente, presentar ejemplos prácticos entre nosotros de la ineficacia de los concursos y de los desagradados y dificultades a que han dado lugar, de las críticas más o menos fundadas que se han hecho sobre cada uno de los miembros del jurado que han tomado parte en los concursos; pero, si recordaré lo siguiente, sobre lo cual quiero que se medite.

Los mejores profesores de nuestras facultades, han sido nombrados directamente, o bien por las facultades, o bien por el gobierno.

La Comisión cree que salva las dificultades del concurso y de la incompetencia que pueden tener los candidatos convertidos en profesores, diciendo: «El derecho a la cátedra sólo se conserva durante ocho años.» De ocho en ocho años se renuevan los concursos, es decir, se trae una perturbación horrible en las facultades; todas las cátedras vuelven a sacarse a concurso.

Esto dura dos o tres meses, porque nadie sabe qué peripecias siguen a cada una de las tentativas; se produce cierta paralización en la

Universidad: puede haber partidos en pro y en contra y dificultades de todo género.

El remedio es peor que el mal. Para librarse de un incompetente, habría que esperar a que, tras de los ocho años, se sacara otro nuevo concurso, según lo manifestado por el señor miembro informante y según se desprende también del proyecto. Entonces, el incompetente puede enseñar durante ocho años, y los alumnos a que haya enseñado durante ocho años, tienen el derecho de salir a ejercitar su profesión, mal enseñada, por haber tenido el privilegio de poseer un catedrático incompetente que, por la ley, se tolera ocho años — más no —, hasta que viene otro y entra en las mismas condiciones del que acaba de salir. Y para esto, ha sido necesario causar una perturbación general en toda la Universidad, porque se sabe los trastornos que trae una defunción, una renuncia, una separación de un profesor de su aula, cuando ésta se ha de proveer por concurso: luchas, intrigas, las cátedras desatendidas y todo el séquito de dificultades e inconvenientes y disgustos que trae para los miembros del jurado, cuyo desempeño y honorabilidad es el blanco de todas las críticas.

Para mí, los concursos ofrecen una garantía falaz, mientras que los nombramientos hechos por el Poder Ejecutivo a proposición de las facultades, están rodeados de todas las garantías imaginables. Y tiene que ser así, porque las facultades, de quienes no depende el nombramiento — y digo esto, porque si de ellas dependiera obrarían sobre las facultades las mismas razones que obran sobre el jurado —, no han de querer presentar al Poder Ejecutivo una terna de candidatos incompetentes; no han de querer traer a su lado individuos inmorales y no bien preparados. Lo probable es que si las facultades tienen el derecho de presentar candidatos al Poder Ejecutivo para que de entre ellos elija éste el que ha de llenar la cátedra, presenten una terna compuesta de personas honorables y competentes.

¿Qué más garantías se requieren? ¿Puede compararse a esto el azar de un concurso, cuyo resultado puede ser desastroso para la educación?

Se dice que hay dos razones en favor del concurso. Creo haber combatido una de ellas, y me ocuparé de la otra, que es una razón de autoridad.

En todas partes, se dice, las cátedras se dan por concurso, este es el medio universalmente seguido, por que en él se encierran todas las garantías.

Creo poder afirmar lo contrario: la provisión

de cátedras por concurso, es más bien la excepción.

Tengo aquí una carta de persona muy competente, miembro de la Universidad, muy estudiosa y enteramente respetable y que ha tratado de investigar lo que pasa en algunas partes respecto a la provisión de cátedras, y, si la Cámara me permite, voy a leer algunos párrafos de esa carta.

«El segundo sistema, dice, ha tenido en Francia, un decidido y hábil partidario: monsieur Laboulaye.

«Este sistema es el que se observa en Francia, para el nombramiento de los profesores titulares, haciéndose una doble presentación: una por la facultad en que existe la vacante, y la otra por el consejo académico. (Decreto de 9 de Marzo de 1852).»

Resulta que en Francia, cuya universidad copiamos con mayor asiduidad, no se hacen los nombramientos por concurso:

En Alemania, en Bélgica, en Austria, en los Países Bajos, está adoptado el mismo sistema. El tercer sistema es el propuesto actualmente a la Cámara. A mi juicio, es el menos conveniente. Las cátedras serán provistas por oposición, por concurso, se dice, y he oído sostener este sistema con los argumentos: el primero, que es el seguido en casi todas las naciones, y, el segundo, que abre las puertas de las facultades a los jóvenes que más se han distinguido en ellas, siendo éste un medio de estimularlos en el estudio profundo de las ciencias.

El primer argumento no es exacto, pero aun siéndolo, muy escasa sería su fuerza en favor del hecho. Francia ha abolido el concurso para el nombramiento de profesores titulares desde 1852, aun cuando lo conserva para el nombramiento de suplentes. En 1847, se sometió al examen de la Cámara de los Pares, la cuestión relativa al modo como debían nombrarse los profesores de las facultades de medicina, y el concurso fué vivamente atacado en la asamblea por Con y Tenard, pronunciándose la mayoría por la supresión del concurso, a pesar de ser éste sostenido por el ministerio.

«Alemania, Austria, Bélgica y los Países Bajos, no proveen las cátedras por concurso, ni tampoco se sigue este sistema en las universidades de Oxford y de Cambridge.»

Se ve, pues, que la mayor parte de las naciones civilizadas que nosotros tomamos por modelo, no proveen sus cátedras por concurso, y aun cuando las proveyeran, eso querría decir, cuando más, que hay consenso general respecto a este punto; pero tendría este inconveniente nuestra tentativa de innovación: que lo único

que habríamos ganado diciendo: «así lo hacen todos, hagamos nosotros lo mismo», sería adquirir nombre de rutinarios. No tenemos nada.

Sin necesidad de mirar tan lejos, tenemos en nuestro propio país el ejemplo de las ventajas que ofrece la provisión hecha directamente por el Poder Ejecutivo a propuesta de las facultades, y de las desventajas de la provisión por concurso.

Otro de los argumentos que se hace, es que el concurso abre las puertas de las cátedras a los jóvenes estudiantes que se han distinguido en sus exámenes. Para esto no tenemos necesidad del concurso. Ahí está el joven Arata, que tanto se distinguió en sus estudios, profesor y miembro de la facultad; el doctor Pirovano, nombrado también sin concurso, habiendo dejado apenas las aulas, y varios otros jóvenes cuya competencia ha sido reconocida por las facultades y por el gobierno, que han ingresado a las facultades y prestan eminentes servicios al país.

¿Puede alguien garantizar que estos señores habrían salido triunfantes en un concurso?

Hay otras razones que apartan del concurso a las personas eminentes, y es la conciencia de que la «generalidad de los jueces es incompetente», y lo digo de intento, marcando la palabra: en el concurso la mayor parte de los jueces son «incompetentes». ¿Por qué? Porque no saben bien la materia que está en el concurso.

Un jurado de médicos tiene conocimientos de la ciencia en general; pero cada uno de los que componen el jurado no tiene conocimiento especial de la materia sobre que va a juzgar, y mucho menos tiene competencia para juzgar a los decididamente competentes, a los especialistas.

Entonces, las personas eminentes, que tienen su posición adquirida en la sociedad, su reputación hecha, no se prestan a exponer sus títulos al azar de una resolución tomada por individuos que, como hombres científicos, están considerados como inferiores a ellos, — y tienen razón.

Ser derrotados en un concurso por individuos que no tienen la suficiente competencia para juzgar, por individuos a quienes se les está enseñando todos los días en la práctica de los negocios públicos o en la práctica profesional, es algo duro.

Se puede, pues, asegurar que una vez que se establezca la provisión de cátedras por concurso entre nosotros, ninguna persona de cierta respetabilidad, de cierta notoriedad, va a acudir al concurso para obtener una cátedra: se pasarán sin tenerla.

Por estas razones, me opongo formalmente a que se sancione esta parte de la base que ha presentado la Comisión, y propongo que sea substituída por esta otra que voy a dictar al señor secretario: «Las cátedras serán provistas por el Poder Ejecutivo a proposición en terna de las facultades, previa aprobación del consejo superior.»

¿Quién es capaz de señalar un solo defecto en la proposición que acabo de presentar? ¿Quién es capaz de decir que no están tomadas todas las garantías?

La facultad, responsable del éxito de un nombramiento, tiene tres candidatos que presentar al consejo superior para que reciba su sanción.

Si estos tres candidatos o alguno de ellos, no satisface al consejo superior, la facultad podrá nombrar nuevamente. Si el consejo superior acepta los nombres propuestos, pasan al Poder Ejecutivo y éste hace el nombramiento.

¿Es posible creer que cuando ha pasado por una tramitación así un nombramiento, salga mal? ¿Es posible creer que sea mal candidato, que sea mal elegido el individuo que sea nombrado después de haber recibido la aprobación, primero de la facultad, luego del consejo superior y después del Poder Ejecutivo? ¿Es posible creer que las facultades no tomen la crema de los hombres de la ciencia, para formar con ellos sus profesores, cuando estén obligados a presentar al consejo superior su terna y éste al Poder Ejecutivo? ¿Es creíble que no tengan empeño en presentar buenos candidatos, cuando tienen que someterlos a esa tramitación tan larga?

Creo que, como garantías de bondad de los candidatos que se presenten, para ser nombrados catedráticos, no pueden exigirse más, y pido a la Comisión que, retirando de esta base la parte a que me refiero, la substituya por la que acabo de presentar.

Sr. Baltoré. — Al informar en este asunto, señor presidente, dije que el concurso de oposición tenía defensores y adversarios convenidos.

El señor ministro es adversario del concurso de oposición, y ha dicho en contra de él cuanto se puede decir sobre esta materia.

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — Si me permite, le rectificaré. Desgraciadamente no he dicho todo, me he olvidado de citar un caso pertinente y de actualidad, que serviría para dar una prueba más en apoyo de lo que he dicho.

Se trata actualmente de la provisión de una cátedra; una de las facultades, que no nom-

bro, está empeñada en hacer la provisión por concurso; pero la misma facultad ha indicado personas de su seno para que me vean a mí, es decir, para que se vean con mi ministerio y me manifiesten los derechos que uno de los catedráticos tiene a la cátedra.

La facultad probablemente será el jurado de este concurso, y les pido a los señores de la Cámara que vean en qué condiciones quedaría este jurado, cuando de antemano establece los derechos que uno de los catedráticos tendría a la cátedra.

Dado este informe, puede continuar.

Sr. Baltoré. — Bien, señor presidente. El señor ministro ha expresado las dificultades que el concurso ofrece, dificultades que la Comisión no ha desconocido.

Las tiene sin duda el concurso, como todas las cosas humanas, y es por eso que he manifestado que entre las dificultades de lo arbitrario y las del concurso, está hoy unánime la opinión en favor de la provisión de las cátedras por medio del concurso.

El concurso está de moda, y tal vez en día no lejano será el medio de proveer hasta los empleos civiles.

Imposible es, cuando se tienen garantías de todo género para acertar por medio de los concursos y elegir los profesores más competentes, imposible me parece, a pesar de lo que dice el señor ministro, que se puede demostrar que por ese medio no se ha de arribar al resultado que buscamos, y que se ha de proceder mejor por medio de los nombramientos arbitrarios.

Los profesores nombrados por concurso, tienen desde luego, no solamente todas las precauciones que necesitan, todas las garantías de competencia, sino también por su título obtenido en virtud de las pruebas que han rendido, la tranquilidad que el profesor necesita para desempeñar su puesto, y desempeñarlo bien.

El profesor que se nombra por el Poder Ejecutivo, cualquiera sea la forma que se establezca, puede ser separado por el Poder Ejecutivo, y éste es bastante motivo para que no tenga la tranquilidad necesaria aquel que se dedica a la enseñanza.

Se dice que nadie irá a los concursos, o que irán únicamente los audaces. Los audaces suelen tener inteligencia, o más bien dicho, la tienen generalmente; pero yo pienso que irán a los concursos todos, pues esta ley es para más adelante.

Cada día los abogados, como los médicos, vienen sosteniendo una fuerte competencia en

el ejercicio de su profesión. Espero que en nuestro país se cree algún día la carrera del profesorado.

Entonces, con la idea que antes he apuntado, dadas las mayores garantías que la ley ofrece al ejercicio del profesorado, se presentarán personas competentes, debemos esperarlo.

No veo entonces dificultad de ninguna especie, para que se adopte la provisión de cátedras por concurso; y, por mi parte, creo que los miembros de la Comisión, con quien hemos conferenciado largamente sobre este punto, también estaban de acuerdo con lo que voy a manifestar: que la Comisión no acepta la modificación propuesta por el señor ministro.

Sr. Avellaneda. — Siento sobremana que la hora de la sesión se encuentre tan avanzada, porque mi intento era contestar detenidamente el largo, prolijo y erudito discurso que acaba de pronunciar el señor ministro de instrucción pública.

Ha recorrido todos los tonos y todos los argumentos, desde el ingenioso, desde el más sutil, hasta el más trágico, y digo trágico, porque el señor ministro nos ha representado con los concursos un día de pavor para la universidad.

Acabamos de verlo. Llegará un día y todas las cátedras se encuentran vacantes, y los discípulos en huelga inevitables.

Hay la provisión general de cátedras; y por una parte se nota el desorden de la enseñanza, que de pronto cesa; y por otra las agitaciones, las competencias, los trastornos de los concursos que se establecen, substituyendo todo esto al régimen universitario, que debe ser tranquilo por su naturaleza.

Creo que no ha notado el señor ministro que su pavoroso cuadro parece nacido de la varilla de un mágico, y que no puede jamás revestir un carácter real.

Cómo vamos a aplicar el caso de una oposición a la provisión de cátedras, a medida que queden vacantes, como no es posible suponer que el tiempo se convierta en un agente trágico, para ponerse al servicio de la argumentación del señor ministro, que todos los catedráticos desaparezcan en un día, para que un día también sean provistas todas las cátedras, no estamos por cierto destinados a presenciar el cuadro del señor ministro. Debemos, por el contrario, creer que se ha de seguir en esto como en lo demás el orden gradual de la naturaleza, y podemos entonces decir que una cátedra vacará hoy, que vacará otra dentro de tres o cuatro años, y así sucesivamente, y que,

por lo tanto, no hemos de asistir a ese juicio final, en que las cornetas suenan, llamando a los vivos y a los muertos dentro del recinto de nuestras universidades.

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — Pero si precisamente la naturaleza determina que ocho años pasan en el número de días correspondientes, y como la Comisión sostiene que cada ocho años se proveerá cada cátedra, habiendo cincuenta y tantos profesores, por ejemplo, resultaría, término medio, diez cátedras en concurso por año.

Añada a eso el señor senador la muerte de los catedráticos, pues no son inmortales.

Sr. Avellaneda. — Pero no han de morir en un día o en un año, de manera que la provisión será sucesiva, según las vacantes ocurrieren.

El concurso no se aplica desde luego a las cátedras hoy ocupadas y que seguirán desempeñándose por las actuales titulares así. Teniendo en cuenta el término medio de la vida ordinaria de un hombre, los catedráticos actuales morirán en un término de veinticinco años, y esa será la época dentro de la que hayan de proveerse las cátedras.

De manera que la escena que nos presentaba el señor ministro, tendría que distribuirse en medio siglo o un cuarto de siglo.

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — No ha sido esa la intención de mi expresión, y, como el señor senador por Tucumán, con su lenguaje florido, se ha permitido modificar un tanto mi argumento, es por eso que he reclamado.

Yo no he dicho que en un solo día se hallarán vacantes las cátedras; pero puedo traer, mediante media hora de espera por parte del señor senador y de la Cámara, el número de cátedras que se encontrarán vacantes al año.

Es indispensable que tenga en cuenta el señor senador, 1º, el término de ocho años para la provisión; eso, cuando menos, da diez vacantes por año; 2º, las defunciones, dado el hecho de no ser inmortales los catedráticos; 3º, las renunciaciones, dado el hecho de no estar asegurados los catedráticos contra las vacilaciones de su pensamiento; 4º, el caso de los hombres públicos, que pueden aceptar las cátedras, que son hombres que viven en la vida pública, ¡cuántas vacantes por esa causa! Y, añádanse los ocho años!

Todo eso quiere decir: concurso permanente, discordia permanente en la Facultad, gran alegría en los alumnos, que ven en ello motivo de fiesta, y, en fin, deficiencia de la enseñanza.

Sr. Avellaneda. — Queda, pues, contestado, señor presidente, el argumento *ad terrorem* que el señor ministro nos hacía. Además, el testimonio de los ocho años pertenece a la Comisión y no a mi proyecto.

La última demostración del señor ministro sólo tiende a demostrar que las cátedras deben quedar vacantes. Pero, precisamente porque deben haber vacantes, un año más, un año menos, es que tratamos de proveerlas y que se ocurra a su provisión por medio del concurso.

Ahora entraré en la serie de argumentos que ha recorrido el señor ministro.

El señor ministro nos ha hecho argumentos históricos.

Me detendré en esa primera parte de su discurso, y pido a la Cámara que no se fatigue con las menciones un poco prolijas y a las que voy a descender.

Señor presidente: el señor ministro nos decía que los concursos son antiguos; y «son nuevos» — porque son, verdaderamente, lo más permanente de las instituciones, sobre las que se basa la vida universitaria, salvo algunas excepciones. Viene a disputarse la conveniencia de los concursos en su terreno clásico, en su suelo natal, como es el recinto universitario, en hora mal elegida por el señor ministro, porque no advierte que hoy el concurso tiende a ser precisamente la forma universal para la provisión de los empleos, porque no solamente ya se aplica al régimen universitario, sino también a todos los empleos civiles, como nos lo demuestra el ejemplo nada menos que del gran pueblo cuyas instituciones hemos adoptado.

Sábase que desde el presidente Garfield se reaccionaba en Estados Unidos contra lo arbitrario y lo caprichoso de los nombramientos en todo el orden de la administración.

Garfield anunció que debía aplicarse un remedio al mal, en beneficio de la nación entera, de los gobiernos y aun de los partidos que sucesivamente lo ejerciesen.

Pues bien; ha llegado últimamente la noticia que la ley de servicio civil ha sido ya dada en el Congreso de Estados Unidos, y esa ley estatuye una comisión de exámenes, a fin de que no se pueda dar ningún nombramiento sino a aquel que habiéndose presentado ante el examen, haya rendido pruebas claras de su competencia para el servicio a que es llamado. Serán preferidos los que resulten más capaces.

Entonces yo digo: si hoy el concurso viene por todas las avenidas, si hoy el concurso viene como agente para el servicio de todas las

ramas de la administración, ¿cómo vamos a suprimir el concurso precisamente en la tierra clásica del concurso, es decir, en la universidad, donde el examen, la competencia, la controversia y la discusión forman el alma misma de la enseñanza? Allí la controversia y la discusión no son por cierto un trastorno como lo insinuaba el señor ministro, porque son la función natural del estudio, y hasta la elevación y la alegría del espíritu.

Pero, voy adelante, señor presidente.

El señor ministro nos hacía una reseña histórica y nos decía: «el concurso es viejo». Y yo le agregaría todavía esta palabra: «demasiado viejo, señor presidente. Es coetáneo de la vida universitaria misma; de tal modo, que sería muy difícil separar la vida universitaria de los concursos.»

Pero su antigüedad está revelando que no hay otra institución más inherente al régimen universitario, y que es como su producto natural. Durante siglos, dondequiera que hubo un aula, disputaban los alumnos para aprender, y habían disputado los maestros, para obtener como un premio esta facultad de enseñar que sólo era alcanzada en buena lid. Bajo esta base se fundaron las universidades de América y funcionaban ya las de España.

Hasta principios de este siglo, todas las universidades, aun las provenientes de la Edad Media, es decir, durante tres o cuatro siglos, no han provisto sus cátedras sino por este medio sempiterno e invariable de los concursos. Este hecho constituye el más grande argumento que pueda invocarse, fundado en la autoridad humana.

El señor ministro se refirió a la época moderna, poniendo en contrario algunos ejemplos, y esta es precisamente la época que menos puede ser citada como autoridad y como ejemplo en la materia, y aunque esto pueda parecer paradójal, creo que la Cámara aceptará mi indicación después de breves explicaciones.

En los tiempos anteriores, en los tres siglos últimos, en el recinto universitario, todo lo que se hacía: provisión de cátedras, programas de estudios, disciplina de la enseñanza, todo, era únicamente consagrado al bien de la enseñanza, término, medio y fin.

Pero después, precisamente con este siglo, han venido las grandes preocupaciones de otro orden a entrar en el recinto universitario. Se quería a veces hacer de las universidades un instrumento político, o venían a plantearse en sus claustros otras cuestiones, otras grandes luchas, de las que nos citaba el señor ministro

algunos fragmentos o referencias en los artículos de leyes o decretos que ha leído.

Así sobrevino en Francia, por ejemplo, la lucha entre los clericales y los universitarios; quiso desterrarse de la Universidad de París toda influencia eclesiástica, y muchas veces hasta religiosa; y se suprimieron los concursos, donde todos podían y debían ser admitidos, para estatuir medios más restringidos para la provisión de las cátedras, y por lo tanto, más adecuados a los objetos que se tenían en vista.

Es precisamente a estos designios no universitarios que han respondido los estatutos y reglamentos que menciona el señor ministro, y esa diversidad de legislaciones que han complicado con tantos otros intereses la vida universitaria en Francia.

Pero sigo todavía, señor presidente, en este terreno. Puesto que el señor ministro lo propone, hablemos de la Universidad de París.

En Francia, en la Universidad de París; en aquel gran cenáculo del saber humano durante cuatro siglos, el concurso fué la ley hasta los últimos años del siglo pasado.

La universidad de la Revolución, de la República — del consulado republicano —, apenas tuvo una vida débil.

Sus ejemplos no son ejemplos, hasta que llega la gran restauración de la universidad por Napoleón.

Napoleón quiso organizar la universidad, para que fuera como uno de los departamentos de su administración; quiso tenerla bajo su mano; y llamó para regir la universidad a oradores de sus pompas oficiales, y nombró por gran maestro de la universidad a monsieur de Fontanes.

Allí está el reglamento de Napoleón, que más tarde se convirtió en un *senatus consultus*: todo depende de Napoleón, todo está bajo su mano, todo está regido por su voluntad, todo, menos la provisión de las cátedras. El reglamento de Napoleón determina que las cátedras saen provistas en concurso. Napoleón comprendió que el concurso es inherente al régimen universitario, que es su savia, que es su vida.

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — Esto es: Napoleón hacía ver a los miembros del jurado para que nombraran al candidato que él quería; es decir, Napoleón tenía indirectamente el nombramiento de los catedráticos.

Sr. Avellaneda. — Lo que digo es histórico, y lo que dice el señor ministro, ¿lo es?

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — Hay dos medios de presentar la

verdad: uno en que es aparente, y otro en que está detrás de bastidores.

Sr. Avellaneda. — A lo que me atengo, es a la verdad histórica.

El despotismo de Napoleón era muy franco y no se envolvía en subterfugios.

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — Es decir: a la verdad escrita en los libros de historia.

Sr. Avellaneda. — Sigo adelante.

Vino la gran lucha para excluir del recinto de la universidad, no sólo la influencia clerical, sino otras influencias políticas que pertenecían al pasado de Francia. El Estado quería tener en su mano poderosa y solo, la provisión de cátedras; y entonces, después de grandes discusiones, sobrevino la ley del 52, que ha sido citada por el señor ministro, que suprimió los concursos.

No puedo negar la autenticidad de la ley, pero debo decir también que la ley es complementada por la práctica, y que según esto, no puede afirmarse que los concursos hayan sido totalmente abolidos.

He ahí cómo se nombran los catedráticos, según la ley francesa: la presentación es doble: la facultad propone y el consejo universitario confirma la designación del candidato, para ser pasada al ministerio.

Pero ahí viene lo que el señor ministro ha omitido decir. Generalmente los propuestos son elegidos entre los «agregados» de la universidad que han optado a este puesto precisamente por concursos anteriores.

Los profesores agregados y que son suplentes hasta serlo en propiedad, han obtenido su título mediante un concurso público.

Pero saliendo de esta parte histórica, el señor ministro nos ha hecho argumentos de otra clase, que puedo y debo contestar.

Desde luego, él ha traído el sistema del concurso a ponerlo en parangón con el sistema de los «nombramientos» por una sola persona, indefinida en su discurso, pero clara en nuestra práctica: el Poder Ejecutivo.

Y bien, pues; el señor ministro comparaba estos dos sistemas y decía: donde hay uno que nombra, hay mayor acierto. ¿Por qué? Por que hay mayor responsabilidad? Este es precisamente el argumento que ha pasado triunfante a través de todo su discurso.

El señor ministro se ha colocado, además, en otro terreno, que voy a tomar en cuenta, porque quiero contestar su refutación de una sola vez.

Ha dicho: las facultades pueden y deben elegir, y cuando elijan tranquilamente, ten-

drán todas las condiciones de acierto, elegirán con rectitud, elegirán con conciencia, lo que no sucederá cuando sobrevenga un concurso, porque habiendo competencias habrá lucha, y diversos intereses en pugna, y ya la facultad perderá su imparcialidad.

Estos son los argumentos que resumo brevemente y que voy a procurar contestar.

En primer lugar, señor, el grande argumento en favor de la responsabilidad única, no pasa de ser sino un sofisma.

Si se tratara de una corporación universitaria y de una persona universitaria, cuya vida se encuentra reducida al recinto de la universidad, que vive en presencia de la opinión universitaria y para el cual las promociones de cátedras de enseñanza son los grandes y formidables acontecimientos de su vida, la comparación sería procedente, pero aquí no se trata de eso, aquí se trata de una persona que en la práctica es el Poder Ejecutivo. Y yo digo que la cuestión de responsabilidad, por la provisión de una cátedra para el que manda los ejércitos, para el que dirige la paz y la guerra, para el que tiene en sus manos el presupuesto de la República, es la cuestión de una gota de agua en el océano. No es cuestión de responsabilidad que pueda preocupar su espíritu, cuando tiene intereses tan grandes y tan cuantiosos entregados a su cuidado.

Paso ahora a la otra proposición.

El señor ministro admite la competencia de las «facultades» para hacer los nombramientos, a condición de que no haya concurso.

Señor presidente: no suelo adoptar fácilmente esa clase de argumentos que llevan al adversario a ponerse en contradicción consigo mismo, porque son generalmente peligrosos; pero me parece que en este caso la contradicción es concluyente.

¿Quiénes serían los jueces del concurso? Los jueces serían la «facultad» misma, o miembros derivados de la facultad en cuestión. Ahora bien. ¿Por qué esa misma facultad que el señor ministro reputa tan competente, que sería tan acertada para nombrar, cuando para nombrar no va a tener otro criterio que su juicio privado, ya deja de tener esa calidad, cuando sobreviene el concurso y le patentiza y le pone por delante los medios de acierto?

¿Por qué los que van a elegir, cuando para elegir no tienen por delante la vigilancia de la opinión universitaria, ni las largas pruebas que acaban de rendirse, y que se imponen naturalmente a la atención y a la conciencia del juez, por qué esos mismos hombres en este caso, que no hay pruebas, que no hay competencia, ni

examen que ayuden el juicio, pueden poseer tantos dones de acierto, y dejarían de tenerlo precisamente cuando se les lleva a otro terreno, nombrándolos jueces del concurso y grabando hasta su conciencia con este nombre, para fallar sobre las pruebas rendidas, en presencia de los catedráticos, de los estudiantes, de la universidad entera, que asiste a esos actos? ¿Por qué serán falibles, de seguro, en este caso precisamente, cuando disponen de todos los medios de acierto, y tendrían acierto cuando sólo estén librados a su juicio privado y sin medios de formarlo, o influencias subalternas y obscuras? No lo comprendo, a la verdad.

Señor presidente: los concursos los necesitamos doblemente. Los necesitamos en nuestro país para abrir una nueva y diversa carrera a los jóvenes que educamos por centenares y que se encuentran ya estrechos de todo punto en las antiguas profesiones.

Necesitamos los concursos para dar independencia a la vida universitaria, y porque son su derivación natural. El profesorado es un concurso continuo en la patria de las universidades, en Alemania. Se principia por ser *privat docentem*, sobre la materia que se propone enseñar. Al día siguiente empieza la lucha. El joven profesor necesita atraer discípulos, porque vive de sus emolumentos, y cada sección es una competencia. Cuando se ha sobrepuesto y ha vencido, después de cinco o seis años, se le nombra profesor «extraordinario». Le aguardan todavía nuevas pruebas. Suple a los profesores titulares en todo los casos accidentales, hasta que es llamado por el senado universitario a ocupar un puesto por derecho propio. No hay un acto que se llame «concurso», pero hay una vida pasada en el «concurso».

El nombramiento hecho en virtud de un concurso por el juez del concurso, lleva sobre sí y en favor del agraciado un título permanente de honor.

Es el más alto estímulo para una noble carrera. En vano se harán todos los argumentos, en vano se dará cuanto se quiera: aquel que ha obtenido un título de profesor con sus adversarios por delante, discernido por jueces imparciales, porque deben serlo, y sólo por accidente no lo serían, el que ha obtenido de ese modo una cátedra, se siente dueño de ella y la ostenta como un timbre de mayor honor que aquel otro que sólo ha merecido mediante un decreto que bajó de las alturas.

Además, señor presidente, hálase de los trastornos que en la vida universitaria traen los concursos.

Yo he sido estudiante y he sido catedrático, mi vida ha pasado por muchos años, bajo los claustros universitarios; me he identificado con los que habitan profesionalmente, sintiendo las impresiones y las emociones que sus acontecimientos despiertan; y yo digo en verdad, como estudiante y como catedrático, que el gran día de la universidad es el día un concurso.

El estudiante viene y dice: voy a ver cómo se rinde homenaje al saber, voy a presenciar uno de esos espectáculos que siempre, presencian los hombres conmovidos: el choque, la lucha poderosa de dos o tres inteligencias. En otras partes predominará la fortuna, aquí el saber y el talento.

El catedrático viene a su vez y dice: estoy sentado por mis méritos en este asiento, y cuando este asiento se encuentre vacío, tengo la seguridad que vendrá a llenarse, no por el favor, ni por la ocasión, sino por los méritos comprobados mediante las pruebas más serias. Hay así una tradición de la inteligencia que se perpetúa, honrosa para los que viven y para los que mueren.

Es así el gran día para todos, el día de alegría para los estudiantes, día de las más nobles excitaciones para los espíritus, día de reflexión y de consuelo para los que han pasado su vida en la universidad, día de ventajosa enseñanza, porque se realza en verdad la vida universitaria, se ve que sólo se obtiene la palma de la enseñanza por el saber claramente demostrado. ¿Con qué satisfacción noble no contemplarán ese acto los viejos catedráticos, viendo que el título es discernido a un compañero, no por la arbitrariedad, sino por haber sido obtenido en justa liza!

Creo que estas observaciones, que no prolongo, porque la presencia de las luces me muestra que la hora es avanzada, contestan, en mucha parte, el discurso del señor ministro.

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — Cuando veo un talento grande puesto al servicio de una mala causa, me invade un sentimiento de desconsuelo.

En este caso, confieso que es para mí muy agradable oír hablar al doctor Avellaneda; pero siento que sus dotes oratorias sirvan para inducirlo en error.

El señor senador por Tucumán, en la expresión, en el tono, en la forma de su discurso, en sus palabras y en sus frases, tiene algo de colosal, que aplasta a su adversario; pero...

Sr. Avellaneda. — No mucho, y lo está demostrando el señor ministro.

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — Por eso puse el pero. No obstante, un anatomista no se deja aplastar con facilidad, y voy a hacer algunas observaciones que van a servir para demostrar a esta Cámara que la argumentación del señor senador, si bien es de muy bellas formas, no tiene toda la substancia que debería tener: y no la tiene, no porque falten calidades al expositor, sino porque la materia no la presenta; y nadie puede sacar de la naturaleza lo que la naturaleza no da.

El señor senador por Tucumán había dicho: en todas partes la promoción de cátedras se hace por concurso.

Leo el nombre de las naciones, uno tras de otro: Holanda, Bélgica, Francia, Alemania, Inglaterra, en ninguna se hace en estos momentos el nombramiento por concurso.

El señor senador por Tucumán se contenta con decirme: en tal época, a la venida de Napoleón, todo estaba bajo su mano, excepto las universidades: en las universidades la promoción de cátedras se hacía por concurso; era un jurado el que nombraba los catedráticos. Yo contestaba: sí, bajo la influencia y el dominio de Napoleón, no se nombraba ningún catedrático que no fuera del gusto del jefe del Estado.

Así es como se hacía: en teoría, completa libertad; en el fondo, una sumisión mayor todavía, porque se imponía a los jurados al mayor número, el rol, no de intermediarias, sino de cómplices, de nombramientos muchas veces mal hechos.

Al hablar de la responsabilidad de las personas, ya se llamen presidentes, o de cualquier modo, decía yo que una persona era más responsable que una asamblea, y tomaba la comparación en su término filosófico; pero ya que se quiere en este caso designar una persona: sí, el Poder Ejecutivo es más responsable. ¿Por qué? Porque tiene la vista de la República puesta sobre él, y no se ha de permitir, a sabiendas hacer nombramientos mal hechos; mientras que una corporación, en la cual, vuelvo a repetir, la responsabilidad está muy dividida, sí, lo hará.

Se dice: un catedrático que se siente nombrado en concurso, tiene todo el orgullo de haber obtenido su cátedra en buena y leal lucha; mientras que, ¿qué va a decir un catedrático que siente venir su nombramiento de un decreto del Poder Ejecutivo?

Se puede contestar muy bien: muy poco orgullo podrán tener algunos, que se pueden se-

ñalar con el dedo, dos, tres, veinte, que saben que su nombramiento no viene de esa gran lucha leal, sino de un *caucus*, de un compromiso contraído entre los miembros del jurado, quizá los más incompetentes, para nombrar determinadas personas, quizá, la más incompetente.

Así, se presenta con grandes formas, con gran aparato, una cosa que con unas palabras se destruye, diciendo que ese nombramiento no es el de un jurado independiente, que reuna las condiciones necesarias, de competencia, sino un nombramiento debido a un *caucus*, a un complot.

Parecía que se quería hacerme un reproche, de que hubiera dicho que los concursos son antiguos.

No he querido decir sino que no se presentaba ninguna innovación. Todo es antiguo en el mundo.

El señor senador por Tucumán dice que ¿cómo no ha de ser antiguo el sistema de los concursos, si ha nacido con la universidad? Pues los nombramientos directos han nacido en la universidad, y los nombramientos hechos a propuesta de las facultades también han nacido con la universidad.

De manera que estas tres ideas corren parejas, desde que hay enseñanza; no hay privilegio en favor de ninguna de ellas.

El nombramiento por concurso, el nombramiento directo y el nombramiento hecho a propuesta de las facultades, tienen alternativamente boga en las facultades universitarias, y pasan o vuelven con la moda, según los tiempos.

Dice el señor senador por Tucumán, con toda la elocuencia que le caracteriza, y con aquellas formas seductoras: «cuando había verdadera vida universitaria, en las universidades de la Edad Media todo se hacía por concurso: entonces despertaban verdadero interés los concursos, y todos los miembros de la universidad podían presenciárselo».

Decía también: «es un gran día de fiesta para la universidad el día de un concurso, es un día verdaderamente universitario».

Siento que el señor senador por Tucumán, tan ilustrado, nos presente como modelos dignos de imitarse las universidades de la Edad Media, donde no se enseñaba seguramente ciencia, y donde si se enseñaba algo, era a ignorar lo que convenía a los intereses de los que dominaban en esas universidades.

Sr. Avellaneda. — Se enseñaba teología.

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — Sí, señor, precisamente, y era muy

lindo y muy divertido, pero nada útil para los fines que tiene la sociedad humana.

Sr. Avellaneda. — Y derecho.

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — Y algo más.

Sr. Avellaneda. — Pero cada época enseña lo que sabe, y no debemos ir a buscar ejemplos en épocas atrasadas.

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — El señor senador me acaba de decir lo que se enseñaba en la Edad Media. No se enseñaba ciencia social, no se enseñaba ciencia positiva, biología, medicina, como se enseña ahora; no se enseñaba astronomía, no se enseñaba física ni química; se enseñaba alquimia, y cosas para hacer presentar a los desgraciados como brujos.

Entonces, si no se enseñaba todo eso, las universidades de la Edad Media no son dignas de ser citadas como ejemplo por el señor senador.

Sr. Avellaneda. — Yo no traigo el programa de enseñanza para citarlo ahora.

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — Si de allí emanan los concursos, quiere decir que, siendo universidades atrasadas, el medio es atrasado también, y no debe ser presentado como modelo.

En cuanto a la segunda parte, no es misión de las universidades divertir a los estudiantes, ni halagarlos con días de fiestas como dice el señor senador que son aquellos en que se celebran los concursos; la misión es enseñarles, no proporcionarles fiestas.

Sr. Avellaneda. — Son estímulos.

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — La misión es enseñarles; el estímulo nace en las aulas, entre los mismos estudiantes, sin necesidad de todo esto, porque cada fiesta es un lujo que se paga un pueblo, una corporación o un individuo, una pérdida verdadera, un empleo malo del tiempo.

Los concursos, pues, que distraerían durante muchos días, y quizá meses, a los estudiantes de la universidad, les haría perder su tiempo, que deberían ocuparlo mejor en aprender.

Se habla, señor presidente, de esta innovación de Estados Unidos, de llenar los empleos vacantes por oposición.

No hay nada de extraño en que semejante idea haya nacido en Estados Unidos; podía haber nacido en otra parte; y es probable que antes que Estados Unidos alguien haya propuesto en otra parte eso mismo; pero no permitiré que se emplee este pronombre impersonal «se» para designar un hecho. Un hecho no constituye ninguna prueba. Puede haber surgido semejante idea en Estados Unidos, y, sin embargo, ser enteramente mala, y estoy seguro que lo es, y que no han de llevar a la práctica lo que en teoría parece bueno.

Sr. del Valle. — En Inglaterra, sobre todo, el gobierno de la India.

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — ¿Y dónde más?

Sr. del Valle. — ¡Basta!, son las dos naciones que dirigen el pensamiento del mundo!

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — No basta, porque si las demás naciones no lo hacen, dos no constituyen ley. ¡Tan respetuosos que son los señores senadores, de las mayorías, y sin embargo, quieren en este caso, con dos citas, hacer triunfar una doctrina!

Sr. del Valle. — No pretendo hacer triunfar nada; contesto la observación. El señor ministro dijo que en ninguna otra parte se hacían los nombramientos por concurso, y yo le he dado un dato que ignoraba.

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — Es probable que en alguna parte se haga, también, y el señor senador y yo lo ignoremos.

La provisión de empleos por concurso puede depender de circunstancias enteramente accesorias, y yo me explico que esto haya podido hacerse en Norte América, donde hay tantos individuos competentes para un puesto. Entonces es muy natural que presentándose varios a obtenerlo, se diga: dése examen.

¿Y por qué ir a buscar tan lejos los ejemplos? Entre nosotros mismos creo que una de las reparticiones del gobierno nacional ha puesto en práctica el sistema de examen para la provisión de un empleo, hace poco tiempo, y con éxito; pero de eso a erigir en sistema este principio, hay mucha distancia.

Los concursos no están en boga, rechazo la afirmación; los concursos para la provisión de cátedras son actualmente una excepción, y esta es la parte fundamental del discurso del señor senador por Tucumán, que quiero contradecir.

He citado nombres de naciones, apoyándome en la autoridad de un hombre que no dice una falsedad, que conoce verdaderamente estas cosas y que las estudia.

No se proveen las cátedras por concurso en los países que he indicado; y esos son los ejemplos dignos de imitarse, no son las universida-

des antiguas, con su deficiencia de estudios: con sus programas reducidos, con su enseñanza... de nada! En nuestras circunstancias, las que deben ser citadas, son las universidades modernas, donde se enseñan las ciencias en todos sus desenvolvimientos y con todos sus accidentes. Pues allí, en las universidades de Francia e Inglaterra, no se hacen las provisiones por concurso.

Le ha parecido al señor senador por Tucumán encontrarme en una contradicción, y me gustaba ver el cuidado que ponía en marcar bien cómo era cierta esta contradicción. Yo estaba viendo la contestación que se le podía dar.

Encontraba contradicción en mis palabras y decía: ¿cómo, si las facultades tienen acierto para proponer como simples facultades, no tendrán acierto para juzgar cuando hagan papel de jurados? ¡Pero si es muy sencillo! Cualquier individuo que pase por la calle, sabe, y puede afirmarlo bajo su responsabilidad y en documento firmado por él, que el doctor Avellaneda, por ejemplo, es un diestro orador y un jurisconsulto de primer orden; pero, cualquier individuo que pase por la calle, no puede ser juez del doctor Avellaneda y examinarlo en derecho. Luego, una facultad puede ser muy competente para saber que un individuo sabe enseñar, y ser muy competente para juzgarlo con ideas propias.

Ahí tiene cómo no hay contradicción ninguna. Un jurado puede saber que el doctor Rawson es un miembro eminente del cuerpo médico argentino, y, recogiendo esta idea de su conciencia, de las afirmaciones que ha oído hacer a otros hombres, de todas partes, decirlo con la seguridad de que afirma la verdad cuando afirma el hecho; y sin embargo, ese individuo que puede asegurar y garantizar, con todos los elementos que posee el criterio humano para las afirmaciones, que tal individuo es competente, puede no saber juzgarlo, porque para juzgar la materia de un concurso, se necesita conocer la materia y para saber que un hombre sabe, basta conocerlo...

Sr. Avellaneda. — ¿Aunque no conozca la materia?

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — Aunque no conozca la materia.

Sr. Avellaneda. — Entonces el juicio, ¿qué importa?

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — Acabo de demostrar que no hay contradicción. Una facultad puede saber que un individuo es competente para desempeñar

un puesto, y presentarlo, y puede no ser competente el jurado para juzgarlo en la materia de que se trate.

Esto es elemental y hasta con el ejemplo que acabo de presentar. Una facultad puede ser muy competente para buscar los candidatos, y mal juez en los concursos. No hay contradicción.

Se dice: se va a abrir la puerta a las aspiraciones de la juventud.

¿Cuándo se les cierra por el procedimiento que he indicado?

Yo no digo — y en esto hago honor a las facultades, porque parezca siempre atacarlas — yo no digo que en muchos casos los jurados no proceden con imparcialidad: pero si de eso no se puede tener una seguridad absoluta, si las facultades, empeñadas en el desarrollo de la instrucción, que tanto conocen las cualidades de los individuos que han aprendido en sus aulas, que tienen esa estimación que nace entre estudiante y catedrático, si están a cabo de los buenos exámenes que han dado los alumnos, ¿por qué estas facultades le han de cerrar la puerta?

Es probable que en la primera vacante, los propongan, que los admitan entre los substitutos y que los tengan después en vista para proponerlos al consejo universitario y éste al gobierno.

¿Por qué se dice que no habiendo concurso es cerrar la puerta casi seguramente a la competencia real, para abrirla a los que he dicho antes, a los audaces, a los más enérgicos?; porque es necesario, señor presidente, estudiar con detención cómo procede el espíritu humano en ciertas circunstancias, cómo un individuo es tímido para presentarse a un concurso y sabe positivamente que tiene conocimientos más extensos que otro que es más audaz. Todos los días vemos eso en las aulas: alumnos llenos de competencia y de conocimiento que dan mal examen y malas pruebas, y saben, sin embargo, más que los otros.

Así, pues, la reputación de un estudiante, no depende jamás de los exámenes; depende de la conciencia general de sus compañeros: son los compañeros los que le hacen la reputación.

Yo creo, pues, que la Cámara haría bien en rechazar esta parte del proyecto de la Comisión y aceptar la proposición tal cual la he redactado, porque no se le ha hecho objeción de ningún género.

Sr. Presidente. — Se va a votar..

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — Pediría que se votara por partes.

Junio 23 de 1883

CAMARA DE SENADORES

22ª Reunión. 20ª Sesión ordinaria

Sr. Avellaneda. — Que se vote lo que está en controversia.

Sr. Cambaceres. — Debe votarse toda la base 3ª, como la propone la Comisión; y en caso de que fuera rechazada, se votará la proposición del señor ministro.

Sr. Presidente. — Es de reglamento.

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — Proponía que se votara por partes, párrafo por párrafo, y creo que eso puede hacerse.

Sr. Presidente. — Sí, señor, si el señor ministro lo pide.

—Puesto a votación el primer párrafo, es aprobado por notable mayoría. El 2º y el 3º obtienen igual resultado.

—El 4º, objeto de discusión, se aprueba por 10 votos contra 9.

—Los demás párrafos se aprueban, lo mismo que el artículo 2º. El 3º es de forma.

Sr. Presidente. — Ha terminado la sesión.

—Eran las 5 y 30 de la tarde.